

## **Cesión de datos para la realización de un estudio sociológico - Año 2002**

Se ha planteado una consulta sobre la posibilidad de que sean comunicadas por parte de varias Universidades públicas a una persona o entidad que tenga prevista la realización de un proyecto de Investigación sociológico determinados datos personales, con la finalidad de delimitar a las personas concretas que serán contactadas para la efectiva realización del estudio. La consultante amparaba la cesión en el artículo 11.2 e) de la LOPD, según el cual sería posible la cesión de los datos sin contar con el consentimiento de los afectados cuando la misma se produjera entre Administraciones Públicas y se realizara con fines históricos, científicos o estadísticos.

Para que fuera posible la aplicación del supuesto invocado es preciso, en primer lugar, que exista una adecuación subjetiva del supuesto de hecho al que se pretenda aplicar. Ello implicaría que tanto el cedente como el cesionario tuviesen encaje en el concepto jurídico de Administración Pública.

En este caso, dicho presupuesto no planteaba problemas en el caso del cedente, pues se trataría en todo caso de universidades públicas, pero sí plantea ciertas dudas en el supuesto del cesionario. En caso de que el destinatario fuese un Instituto Universitario de Investigación, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, indica que los mismos se configuran como centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística, que se rigen por dicha Ley y por sus propios estatutos o convenios de creación o adscripción, y cuya creación ha de ser acordada por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad (artículo 10. 3 en relación con el 8. 2).

Pues bien, cabe indicar que únicamente en el supuesto de que el proyecto científico se desarrollase por un Instituto Universitario a título institucional podrían ser de aplicación los artículos 21. 1 y 11.2 e) de la LOPD, siendo en caso contrario (desarrollo del mismo a título personal por personal docente universitario, adscrito o no al mismo) de aplicación el artículo 11.1 LOPD, que exigiría el consentimiento del afectado para la cesión de los datos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar si la cesión analizada puede tener encaje en el citado supuesto, esto es, cesión entre Administraciones públicas para el tratamiento de los datos con un fin científico.

El término "científico" desde un punto de vista semántico implica pertenencia a una ciencia. Tal expresión, entendida literalmente, tiene una amplitud omnicomprendensiva que implicaría la posibilidad de conectar prácticamente cualquier tratamiento de datos personales con una especialidad científica, tanto referida a las ciencias sociales como a las naturales. Así, incluso un estudio de mercado, de publicidad, o de técnicas comerciales o publicidad tendría o podría establecerse una conexión con una especialidad o rama del conocimiento (ciencias económicas, ciencias de la información, etc.).

Parece en consecuencia lógico que la interpretación auténtica de tal precepto deba efectuarse desde su subordinación a los principios de calidad de los datos y de proporcionalidad que establece la LOPD. Así el artículo 4 de la misma establece en su apartado primero que "Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido".

De este modo, los artículos 21. 1 y 11. 2 e) de la LOPD deben ser interpretados a la luz de este principio y de la doctrina consagrada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, que configura la protección de datos como un auténtico derecho fundamental. Cuando dichos preceptos aluden al fin científico del tratamiento de los datos personales como supuesto que al excluir el consentimiento previo a la cesión de los mismos, están limitando y excluyendo tal poder decisorio y dispositivo de los ciudadanos que les es inherente según se ha visto. No todo proyecto intitulado "científico" amparará la cesión de datos prevista en los preceptos indicados, debiéndose analizar detenidamente y de forma individualizada a fin de determinar si efectivamente, a la vista del ente que desarrolla la investigación, el fin de la misma y la proporcionalidad de la intromisión o limitación del derecho considerado que dicho estudio conlleve, puede efectivamente considerarse procedente la aplicación de tales preceptos de la Ley Orgánica 15/1999. Se trataría en consecuencia de considerar las circunstancias concretas que concurrirían en cada supuesto sometido a la opinión de la Agencia Española de Protección de Datos, teniendo en cuenta, en especial, la normativa específica que pudiese resultar de aplicación al mismo (como por ejemplo sucedería en el caso de actividades científico-sanitarias).

En el caso sometido a informe se apreció, en primer lugar, que los datos que se tratan de obtener deben considerarse adecuados y proporcionados a la finalidad del estudio que se pretende desarrollar. Además, la materia objeto de análisis ha sido considerada relevante por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología que decidió incluir el proyecto en el Plan I+D+I.

Por otra parte, la obtención de dichos datos simplemente tenía por objeto determinar el ámbito subjetivo del estudio en personas concretas, con las que posteriormente los investigadores se pondrían en contacto para solicitarles datos adicionales o analizar su situación personal, lo cual en todo caso va a requerir el consentimiento y la colaboración de los mismos. Del mismo modo, si dicho consentimiento no se obtuviese finalmente, los datos personales de los interesados que los hubiesen denegado deberían en todo caso ser cancelados de manera inmediata, ya que habría desaparecido la finalidad que dio fundamento legal a su tratamiento.

Por todo ello, atendiendo a las circunstancias concurrentes en ese caso concreto, se consideró que la comunicación planteada tendría cabida en el régimen impuesto por la LOPD sin necesidad de recabar con carácter previo el consentimiento de los afectados.

